



El reciente acuerdo sobre Doñana marca un hito hacia una transición justa que equilibra las demandas de la agricultura con la conservación ambiental

La necesidad de llevar la transición justa más allá de la transición energética

Wifredo Miró Baiges

Coordinador Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT

El concepto de «transición justa» ha cobrado importancia, sobre todo en el contexto de la transición ecológica, donde se destaca la relevancia de asegurar la equidad en el proceso. La crisis climática es una de nuestras principales preocupaciones en la actualidad, lo que exige una transición rápida hacia un modelo de desarrollo con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Esta transición debe ser equitativa, asegurando la inclusión y teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas trabajadoras.

Es fundamental asegurar la equidad en la respuesta a la crisis climática

La actividad humana, especialmente la quema de combustibles fósiles, se considera la principal causa de la crisis climática. Sus efectos incluyen el aumento de la temperatura global, la desertificación, la elevación del nivel del mar y la escasez de agua entre otros. Estos impactos tienen consecuencias graves para las personas trabajadoras, como desplazamientos de población, pérdida de biodiversidad y aumento de incendios forestales.

El año 2023 marcó hitos alarmantes en el registro climático según datos de la Organización Meteorológica Mundial (WMO), que confirman que se alcanzaron las temperaturas más altas jamás registradas hasta la fecha, estableciendo récords de temperatura desde que se tienen registros meteorológicos. También se registraron importantes pérdidas de hielo en los glaciares mundiales desde 1950, mientras que el hielo marino antártico alcanzó mínimos históricos en su extensión.

España no ha estado exenta de estos fenómenos, ya que en el año 2023 sufrió una sequía severa que provocó importantes pérdidas económicas. Esto tuvo un impacto directo en las personas trabajadoras del sector rural, cuya supervivencia depende de este recurso. La estrecha relación entre la crisis climática y la desigualdad socioeconómica resalta la vulnerabilidad de ciertas comunidades ante los impactos climáticos extremos. El aumento de la temperatura global afecta diversos aspectos de la vida de las personas trabajadoras, como la salud, la seguridad alimentaria, el agua, la migración, la economía y la sociedad en general.

Inclusión y oportunidades

Es fundamental implementar medidas decisivas para abordar este desafío global y asegurar la equidad en la respuesta a la crisis climática. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una transición hacia un modelo con menores emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global y, por ende, de la emergencia climática. No obstante, esta transición debe asegurar la inclusión de todas las personas trabajadoras.

Los sindicatos hemos adoptado el concepto de «transición justa» para referirnos a un proceso económico equitativo que busca minimizar los impactos negativos del cambio climático en el empleo y las condiciones de vida de las personas trabajadoras y las comunidades, al mismo tiempo que busca crear nuevas oportunidades económicas en sectores más sostenibles.

Los principios básicos de la transición justa incluyen la participación de personas trabajadoras y comunidades en



Protección social para aquellos que puedan perder su trabajo y la creación de empleos verdes en áreas sostenibles © Pixabay

España es uno de los países que más ha avanzado en la transición justa

la planificación e implementación de políticas, la protección social para aquellos que puedan perder sus empleos, la creación de empleos verdes en áreas sostenibles, y un diálogo social abierto y transparente entre diferentes actores.

Es esencial prever, anticipar y planificar de manera minuciosa la transición justa, teniendo en cuenta los efectos en el mercado laboral y en las comunidades, y adoptando medidas para reducirlos. Asimismo, resulta crucial respaldar a las comunidades y asistirlas en su adaptación a la nueva realidad económica, especialmente aquellas relacionadas con industrias que se transformarán con el nuevo modelo, como las vinculadas a los combustibles fósiles.

La creación de empleos verdes debe ser una prioridad en la transición justa, implementando políticas que fomenten la formación y la creación de nuevas oportunidades en sectores sostenibles.

Un referente global

España es uno de los países que más ha avanzado hasta la fecha en la transición justa. A nivel global somos un referente, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer. En febrero de 2019, el Gobierno español aprobó el Marco Estratégico de Energía y Clima, que constaba de tres pilares: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

Un aspecto muy interesante es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incorporó la obligación de aprobar Estrategias de Transición Justa cada cinco años para hacer frente a los efectos de la descarbonización. En este sentido, estamos pendientes de poder participar en la nueva estrategia que debe realizarse este año.

En la Estrategia de Transición Justa se incluyó la creación del Instituto de Transición Justa, que fue fundado en abril de 2020. Sin duda es esencial que dentro del Gobierno exista una estructura centrada únicamente en la transición justa. Aunque la transición justa debe estar incluida en todas las políticas, no debe haber duda sobre quién está liderando el proceso dentro del Gobierno.



Abordar esta transición ofrece la oportunidad de generar empleo e infraestructuras verdes e impulsar la electrificación mediante energías renovables © Lucas Bieri / Pixabay

Uno de los principales objetivos del Instituto de Transición Justa es implementar los Convenios de Transición Justa como herramientas para desarrollar planes en las áreas más afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. Actualmente, hay 15 Convenios de Transición Justa en España.

No hay duda de que somos un país muy avanzado. Pero los sindicatos somos muy exigentes, la situación lo requiere, porque vemos que, a pesar de todas las medidas, hay personas trabajadoras que terminan perdiendo sus empleos. Los proyectos incluidos en los Convenios de Transición Justa tienen un gran potencial, pero deben desarrollarse con más celeridad, reducir su burocracia, para que entre el cierre de una actividad y la creación de una nueva no pase un tiempo del que no disponemos.

Las claves para una transición justa exitosa pasan ineludiblemente por la anticipación, el diálogo social, la participación de las personas trabajadoras en el proceso, una protección social específica, la formación y recualificación de las personas trabajadoras, los planes de reactivación y diversificación económica a nivel territorial y el contar con fondos y financiación suficiente.

Otro elemento clave que quería transmitir es que necesitamos ampliar el enfoque de la transición justa más allá de la producción de energía. Muchos otros sectores se van a ver afectados tanto por las políticas de mitigación del cambio climático como por los impactos físicos del propio cambio climático. Es por eso que necesitamos planes de transición justa tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático.

Priorizar la eficiencia energética genera beneficios económicos y sociales

Un ejemplo en este sentido lo podemos observar en los recientes acuerdos alcanzados en Doñana y el Mar Menor, los cuales resaltan la relevancia de abordar la transición ecológica de forma justa en diferentes territorios y sectores.

Doñana: contemplar todas las partes

El acuerdo sobre Doñana en relación con los pozos ilegales marca un hito significativo hacia una transición justa que equilibra las demandas de la agricultura con la conservación del medio ambiente. El cierre de los regadíos ilegales es vital para preservar este ecosistema vulnerable y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, protegiendo el acuífero y evitando la sobreexplotación que afecta tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.

La inversión económica del Gobierno central y la Junta de Andalucía destinada al desarrollo sostenible de Doñana y sus alrededores se enfoca en renaturalizar áreas agrícolas, impulsar la agroindustria y fomentar cultivos alternativos de secano. Además, se refuerza el cierre de los pozos ilegales y se implementan medidas de control del consumo de agua, como el monitoreo mediante imágenes de satélite y la vigilancia fluvial. Los agricultores de la Corona Norte recibirán apoyo para dejar de cultivar sus tierras y adoptar prácticas agrícolas más sostenibles, lo que les permitirá diversificar sus actividades y adaptarse al cambio.

Este acuerdo busca legitimar socialmente la gestión del agua en la región al reconocer la importancia de considerar a todas las partes interesadas, incluidas las personas trabajadoras, en la toma de decisiones. Al evitar la legalización de grandes extensiones de cultivo en Doñana, se protege su patrimonio natural y se promueve una gestión más equitativa y justa del recurso hídrico, asegurando un equilibrio entre las necesidades de la agricultura y la conservación ambiental.

El Mar Menor, una personalidad jurídica

El caso del Mar Menor ejemplifica un acuerdo de transición justa que busca equilibrar la protección ambiental con las necesidades económicas y sociales, destacando el papel crucial de la iniciativa ciudadana en este proceso. La otorgación de personalidad jurídica propia al Mar Menor, la Iniciativa Legislativa Popular que recopiló medio millón de firmas y la inversión anunciada por el Gobierno para su recuperación son hitos significativos en esta transición.



Los sindicatos son “muy exigentes y creen que los proyectos incluidos en los Convenios de Transición Justa tienen un gran potencial, pero deben desarrollarse con más celeridad”
© Helena Perelló / UGT

Además, la creación de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, con el objetivo de coordinar y cooperar en las políticas y actuaciones que afectan a este humedal, subraya la importancia de la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil en la preservación de su capital natural.

Estos acuerdos representan un paso importante hacia la protección y recuperación del Mar Menor, con un enfoque en la sostenibilidad y la justicia ambiental. Estos ejemplos representan avances significativos que deberíamos considerar como modelos para futuras acciones en el marco de una transición justa que ha de ir más allá de la descarbonización del sector energético.

La eficiencia energética

Un elemento fundamental en la descarbonización es la eficiencia energética, aunque a menudo se le haya dado un papel secundario en el debate de la transición energética. Si bien la electrificación mediante energías renovables es crucial, el aumento de la demanda eléctrica plantea interrogantes sobre la capacidad para el abastecimiento.

Para abordar este desafío, es necesario hacer eficientes las viviendas e infraestructuras. Gran parte de la energía se consume en la climatización de espacios, tanto para calentar como para enfriarlos. Mejorar el aislamiento térmico y adoptar otras medidas puede reducir drásticamente el consumo energético en estos ámbitos.

Priorizar la eficiencia energética no solo reduce la huella ambiental, sino que también genera beneficios tangibles en términos económicos y sociales. La disminución de los costes energéticos para hogares y empresas, junto con la creación de empleos en sectores vinculados, son solo algunos de los beneficios adicionales que se pueden obtener al impulsar esta medida.

Se requieren condiciones laborales justas y decentes para los trabajadores del sector agroambiental

Tradicionalmente, la construcción ha sido un motor de empleo, pero a menudo se ha llevado a cabo de forma insostenible y a expensas de la pérdida de servicios ecosistémicos al construir en zonas naturales. Sin embargo, abordar esta transición ofrece la oportunidad de generar empleo verde sin causar efectos adversos en el medio ambiente, e incluso mitigando los impactos de la crisis climática.

Sector agroalimentario

Otro sector afectado por la crisis climática es el agroambiental, que se enfrenta a diversos desafíos, como la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua. Estos desafíos ponen en peligro la seguridad alimentaria y el bienestar tanto de las comunidades rurales como urbanas. Por lo tanto, asegurar el acceso a alimentos saludables y de alta calidad es una prioridad, al ser considerado un derecho fundamental de las personas.

Este proceso implica transformar los sistemas de producción y consumo de alimentos hacia modelos más sostenibles, equitativos y resilientes. Los beneficios de esta transición son variados, incluyendo la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad, la garantía de la seguridad alimentaria y la mejora del bienestar de las comunidades rurales.

Para abordar este proceso, es necesario brindar apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos, quienes son los más afectados por los impactos del cambio climático y la degradación del suelo. Esto implica proporcionarles acceso a cré-



Es necesario brindar apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos, quienes son los más afectados por los impactos del cambio climático y la degradación del suelo © Terabithia



El caso del Mar Menor (al fondo tras La Manga; y en primer término el Mediterráneo) ejemplifica un acuerdo de transición justa que busca equilibrar la protección ambiental con las necesidades económicas y sociales

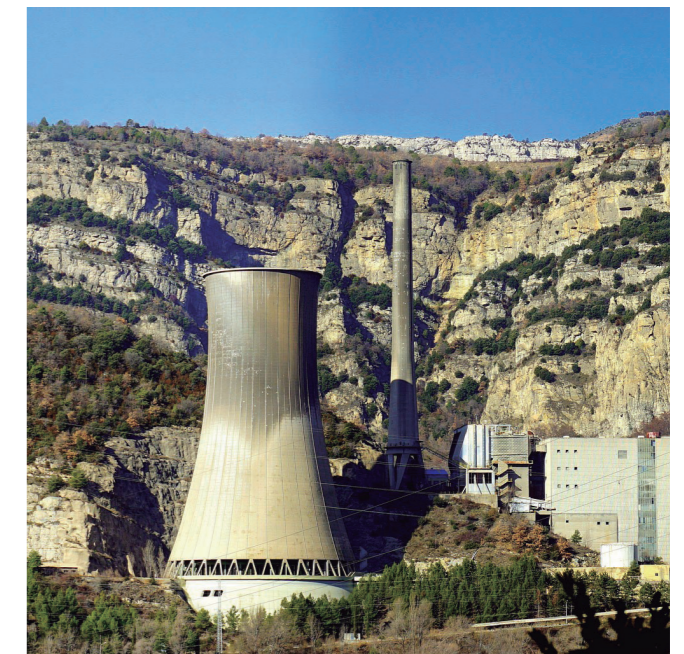
dito, asistencia técnica y mercados para que puedan hacer la transición hacia sistemas de producción más sostenibles.

Además, se requieren condiciones laborales justas y decentes para las personas trabajadoras del sector agroambiental, incluyendo salarios dignos y protección económica frente a los desastres climáticos. Es un desafío que también representa una oportunidad para reformar las cadenas de distribución y evitar que los productores sean constantemente los más perjudicados.

Participación y colaboración

En conclusión, la necesidad de una transición justa hacia modelos más sostenibles y resilientes emerge como una prioridad irrefutable en la lucha contra la crisis climática. Es esencial anticipar y participar de manera activa en este proceso, asegurando la inclusión de todos los sectores de la sociedad y garantizando que ningún individuo quede rezagado. Desde la protección social de aquellos afectados por la transición hasta la generación de empleos verdes, cada paso debe estar guiado por los principios de equidad y justicia. Aunque los casos de éxito tanto a nivel nacional como local demuestran que avanzar hacia una transición justa y ecológica es factible, también señalan los desafíos persistentes, como la urgencia de fortalecer la formación laboral y asegurar condiciones laborales dignas en sectores clave. En este contexto, la colaboración entre diversos actores, desde los gobiernos hasta los sindicatos, las empresas y la sociedad civil, emerge como un pilar fundamental para abordar exitosamente este desafío.

Son necesarios planes de transición justa para la mitigación y la adaptación al cambio climático



Es vital respaldar a las comunidades en su adaptación a la nueva realidad económica, especialmente aquellas relacionadas con industrias como las vinculadas a los combustibles fósiles © Josep Monter Martínez / Pixabay